



GD-F-008 V.9

Página 1 de 12

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20154010010575 DEL 05/05/2015

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición” EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014 y en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios de país.

Que el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1484 de 2014; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de SABANA DE TORRES, del departamento de SANTANDER, es de categoría 6 y como no prestador directo de los servicios públicos a 31 de diciembre de 2013, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP - APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 6° del Decreto 1484 de 2014.

Que contra la decisión de esta superintendencia sobre el proceso de certificación, procede únicamente el recurso de reposición, el cual debía ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 76 del C.P.A.C.A.; recurso que se resuelve en esta Resolución.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010064895, del 26 de diciembre de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de SABANA DE TORRES, departamento de SANTANDER, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 6° del Decreto 1484 de 2014:

1) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complementa o sustituya.

En caso de no poder acreditar el requisito de la forma descrita, podía:



- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
- b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010064895, del 26 de diciembre de 2014.

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010064895, se envió citación al señor alcalde del municipio de SABANA DE TORRES, del departamento de SANTANDER, mediante el oficio No. SSPD 20144010808701, del 26 de diciembre de 2014, enviado por correo certificado el 05 de enero de 2015 advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El señor EDUAR ALFONSO CHACÓN QUINTERO, en su calidad de apoderado del alcalde municipal, se notificó personalmente el 23 de febrero de 2015 del contenido Resolución No. SSPD 20144010064895.

El señor JAIRO RIVERA ARCINIEGAS, en su calidad de alcalde del municipio de SABANA DE TORRES, del departamento de SANTANDER, mediante documento radicado en esta entidad bajo el No. SSPD 20155290103892 del 05 de marzo de 2015, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010064895.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del C.P.A.C.A, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de SABANA DE TORRES, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20155290103892, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto, se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

" El Municipio de Sabana de Torres para obtener la certificación que acredite el cumplimiento de los requisitos para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico a que se refiere el artículo 4° de la ley 1176 de 2007, debió cumplir los requisitos previstos en el Artículo 6 del Decreto 1484 de 2014. Para tal fin el Municipio de Sabana de Torres, reportó dentro de la oportunidad legal a la Superintendencia de Servicios Públicos, la información con la cual se acreditaba el cumplimiento de los requerimientos previstos en la norma citada.

Por parte del Superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, funcionario competente en la materia, reviso la información suministrada y encontró que el Municipio de Sabana de Torres cumplió con todos los requisitos previstos en el Artículo 6 del Decreto 1484 de 2014, salvo en lo que tiene que ver con la para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios.

Establece el Artículo 6 del Decreto 1484 de 2014, respecto de este requisito.

Artículo 6°. Requisitos generales para los municipios y distritos. Para los municipios y distritos de todas las categorías se verificará cada año, empezando con la vigencia 2013 la cual será evaluada en el año 2014 y así sucesivamente, el cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación:

Aspecto	Requisitos Vigencia 2013	Requisitos Vigencia 2014
Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.	(i) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. En caso de no poder acreditar el requisito de la forma descrita,	(i) Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. (ii) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el
	podrá: a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o. b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar. La información del literal b) en los casos en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tenga la misma, será enviada por dicha entidad a la SSPD por escrito en medio físico y magnético.	pago por concepto de subsidios. La información del numeral (ii) será enviada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por escrito en medio físico y magnético.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el Artículo 6 del Decreto 1484 de 2014, exige a las Entidades Territoriales, a efectos de obtener la certificación que corresponde a la vigencia 2013, la obligación de Reportar al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

En cumplimiento al requisito impuesto por la norma, el Municipio de Sabana de Torres reportó al SUI, dentro de la oportunidad legal para ello que, el acuerdo de Aprobación de los porcentajes de Subsidio y Aporte Solidario de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la vigencia del año 2013, es el Acuerdo No 006 de 2011, expedido por el Concejo Municipal de Sabana de Torres.

Mediante el Acuerdo No 006 de 2011, El Concejo Municipal de Sabana de Torres, dispuso:

Articulo Primero. - Establecer para la vigencia 2011, los siguientes porcentajes de subsidios para el cargo fijo y consumo básico en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Sabana de Torres (Santander):

PORCENTAJE DE SUBSIDIO			
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			ASEO
ESTRATO	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	TARIFA
1 (Bajo- Bajo)	50 %	50 %	50 %
2 (Bajo)	25 %	25 %	25 %
3 (Medio Bajo)	10%	10%	10%

Articulo Segundo. - Establecer como aporte solidario para cada uno de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, los niveles mínimos establecidos por las normas que regulan la materia.

El Acuerdo No 006 de 2011, se encontraba vigente para el año 2013, no ha sido objeto de modificación, adición ni ha sido derogado por otro Acuerdo Municipal ni tampoco ha sido objeto de juicio de ilegalidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo cual a la luz de nuestro ordenamiento jurídico se encontraba vigente para el año 2013.

Ahora bien el Acuerdo No 006 de 2011, fue expedido teniendo en cuenta los parámetros fijados en la Ley 1450 de 2011, norma que dispone:

“ARTÍCULO 125. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los

siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios suministrados por productores de servicios marginales independientes o para uso particular, y ellos mismos en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los aportes de contribución al respectivo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en los porcentajes definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico regulará la materia.

PARÁGRAFO 1o. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de los cobros de los servicios públicos domiciliarios, se considerará a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como suscriptores industriales.

El Inciso primero del Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, establece que para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

El Acuerdo No 06 de 2011, acata esta disposición en la medida que los subsidios aprobados para los Estratos 1, 2, y 3 por concepto del Costo de suministro es de 50% para estrato 1, 25 % para estrato 2 y 10 % para estrato 3. Estos son los porcentajes aprobados y vigentes en el Municipio de Sabana de Torres para la vigencia 2013, cumplen con los requerimientos previstos en el Artículo 125 de la ley 1450 de 2011.

Ahora bien, dispone igualmente el Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 que, los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%). El Acuerdo No 006 de 2011, vigente en el Municipio de Sabana de Torres para el año 2013, dispuso: Establecer como aporte solidario para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, los niveles mínimos establecidos por las normas que regulan la materia.

Para la vigencia 2013 en el Municipio de Sabana de Torres se aplicó contribuciones para Suscriptores Comerciales un aporte solidario equivalente al 50 % y a los Suscriptores industriales un aporte solidario equivalente al 30 %. Es pertinente indicar que en el Municipio de Sabana de Torres no hay suscriptores residenciales de estrato 5 ni suscriptores residenciales de estrato 6. Por tanto este aporte solo se aplica a suscriptores Comerciales e Industriales conforme a lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011.

Está demostrado señor Superintendente que los factores de subsidio y contribuciones que contempla el acuerdo No 006 de 2011, están acordes a los parámetros fijados en la Ley 1450 de 2011, que es el Municipio de Sabana de Torres para la vigencia 2013 estaba vigente el acuerdo No 006 de 2011, norma que no ha sido derogada hasta la fecha, esta ajustada a los preceptos de la ley 1450 de 2011 y corresponde a los subsidios y contribuciones efectivamente aplicados a los suscriptores del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Sabana de Torres en la vigencia 2013.

Es claro, señor Superintendente que para la vigencia 2013 el Municipio de Sabana de Torres tenía aprobado el acuerdo municipal que fijó los factores de subsidio y contribuciones para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, esto es el acuerdo No. 006 de 2011, acto administrativo que no ha sido derogado, modificado, revocado o anulado total o parcialmente, por lo cual surte efectos legales.

Respecto a la vigencia de los actos administrativos el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, norma vigente para la fecha dispone:

ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o

suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.

No se dan respecto del acuerdo No 006 de 2011, ninguna de las condiciones establecidas en la Ley que generen su pérdida de la fuerza ejecutiva, como tampoco ha sido anulado o suspendido, es claro, por mandato legal, que el mismo es de obligatoria cumplimiento y así lo ha venido entendiendo la administración municipal.

Respecto a la existencia de los actos administrativos ha precisado la Corte Constitucional en la Sentencia C- 069 de 1995, M.P. Dr Hernando Herrera Vergara:

La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.

El Consejo de Estado ha expresado su criterio en reiteradas oportunidades en cuanto que el acto administrativo existe desde que se expide, y su eficacia esta condicionada a su publicación o notificación. A juicio de la Corte Constitucional es de aceptable el criterio mencionado. Según el cual los actos administrativos existen desde el momento en que se profieren, y su validez y eficacia están condicionadas a la publicación o notificación, según se trate de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, o de un acto de carácter particular, personal y concreto.

Y respecto de la Fuerza Ejecutoria del acto Administrativo en la misma sentencia se indica:

La fuerza ejecutoria del acto administrativo esta circunscrita a la facultad que tiene la Administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aun en contra de la voluntad de los administrados.

El artículo 64 del Decreto 01 de 1984 consagra:

Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados.

En esta forma, el acto administrativo tiene carácter ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, la cual faculta a la administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir.

La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o los interpuestos se hayan decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos.

Señor Superintendente, el Acuerdo No 006 de 2011, existe, tiene fuerza ejecutoria y por ende es de obligatorio cumplimiento, En ese efecto este acuerdo es expedido por la autoridad competente, esto es el Concejo Municipal de Sabana de Torres, autoridad que conforme a la ley, tiene radicada la competencia para aprobar subsidios en favor de la población del Municipio, el Acuerdo fue sancionado por el Alcalde, revisado por el gobernador y publicado, esto es se cumplieron todos los requisitos legalmente previstos para obtener su ejecutoria.

Si bien es cierto en el artículo primero del acuerdo se establece "Establecer para la vigencia 2011, los siguientes porcentajes de subsidios para el cargo fijo y consumo básico en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Sabana de Torres (Santander), no menos cierto es que el Artículo Tercero de este mismo acuerdo expresamente dispone que: "El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación."

El artículo tercero no limitó la vigencia del acuerdo exclusivamente a la vigencia del año 2011.

Aunado a lo anterior el mismo Artículo 125 de la ley 1450 de 2011, expresamente dispuso:

PARÁGRAFO 1o. Los factores de subsidios y contribuciones **aprobados** por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores **podrán ser modificados antes del término citado**, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

El Parágrafo 1 del artículo 125 de la 1450 de 2011, prorrogó la vigencia de todos los acuerdos vigentes a la fecha de la expedición de la Ley, por un término de Cinco (5) años.

La norma en mención no limita la prórroga de los factores de subsidio y contribuciones, a aquellos aprobados con posterioridad a la expedición de la ley 1437 de 2011, de ser ese el espíritu de la norma, la redacción de la ley hubiese sido muy distinta precisando que solo aplicaría a aquellos acuerdos que se aprueben con posterioridad a la expedición de la ley.

Señala su despacho que el acuerdo No. 006 de 2011, no puede tener la vigencia prevista en la Ley 1450 de 2011, en virtud del principio de la irretroactividad de la ley.

Evidentemente, la Ley por principio general no tiene efectos retroactivos, sin embargo para aceptar que los acuerdos vigentes a la fecha de la expedición de la ley 1450 de 2011 quedaron cobijados con la vigencia automática por cinco años, no se necesario echar mano al principio de irretroactividad.

La Ley y así lo ha aceptado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tiene efectos retrospectivos, en la sentencia T 110 – 11, se preciso:

El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como un límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad.

No puede perderse de vista que si bien es cierto que el legislador descarto en general que la ley retroactiva- principio que, dicho sea de paso, no es absoluta, al punto que la Ley 153 de 1887 derogó expresamente el artículo 13 del C.C., que lo establecía, no lo es menos que, también, por regla, consagro el postulado de la vigencia inmediata de la ley, la cual, rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jurídicas en curso, esto es, aquellas que venían desarrollándose con anterioridad a su promulgación y que se continúan desdoblándose bajos su imperio. // Esa aplicación de la ley nueva a las situaciones jurídicas que vienen del pasado, se concreta, claro esta, a los afectos y a la extensión del derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella establece, sin que ellos indefectiblemente implique retroactividad. Es lo que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia han denominado retrospectividad ... (...) con independencia de la nomenclatura que se utilice para identificar el fenómeno jurídico que se comenta, existe consenso en descartar la aplicación absoluta del postulado de la irretroactividad, para abrirle paso a una concepción mas tuitiva, solidaria y fraterna, como hay indiscutiblemente lo reclama la familia, base esencial de la sociedad. // (...) Dicho en otros términos, si la Ley 54 de 1990 tiene vigencia inmediata, necesariamente es retrospectiva, efecto que impone considerar el tiempo de convivencia anterior a su promulgación, con el fin de computar el plazo en ella previsto para la configuración de la sociedad patrimonial ente compañeros permanentes.

De las sentencias estudiadas se extrae, en conclusión, que (i) por regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con retrospectividad;

(ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aun no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), el juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito de estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales marginados.

Dos importantes conclusiones se pueden colegir de este pronunciamiento de la corte Constitucional, en primer lugar que el principio de la irretroactividad de la ley no es un postulado absoluto, toda vez que en ciertas oportunidades la ley tiene en cuenta situaciones generadas bajo el imperio de ley anterior para extender sus efectos en vigencia de una nueva ley, esto es el principio de la retrospectividad de la ley.

Precisamente esto es lo que sucede en torno a la regulación contemplada en el Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, el legislador tiene en cuenta los acuerdos vigentes para la fecha de la expedición de la mencionada ley y les extiende sus efectos por cinco años mas, no de otra manera se puede entender la textual redacción de la norma al indicar:

PARÁGRAFO 1o. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores **podrán ser modificados antes del término citado**, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

Regula la norma acuerdos aprobados con anterioridad a la expedición de la ley 1450 de 2011 pero que para esta fecha se encuentran vigentes y extiende sus efectos por cinco años.

La norma es clara y precisa, su interpretación no debe generar conflicto alguno, ello sin contravenir el principio de irretroactividad invocado por su despacho en defensa de su interpretación, que como se pudo observar no resulta violentada frente al principio de la retrospectividad de la ley.

Para la fecha de expedición de la ley 1450 de 2011 (Junio 16 de 2011), el acuerdo No 006 de 2011, expedido por el Concejo Municipal de Sabana de Torres el Dieciséis (16) de Enero de Dos mil Once (2011), se encontraba vigente, los factores de subsidios y contribuciones aprobados se estaban aplicando en el Municipio de Sabana de Torres, a estos Factores y contribuciones aprobados por el acuerdo No 006 de 2011, se les debe aplicar la prórroga de su vigencia contemplada en el Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, sin que ello vulnere el principio de irretroactividad de la Ley, pues es claro que precepto legal con meridiana claridad dispuso que los factores de subsidio que se encontraban aprobados por el Concejo Municipal y Vigentes agregó, se prórroga su vigencia por cinco años. Una interpretación diferente generaría una discriminación injusta e inequitativa ajena al querer del legislador, someterla a un trato discriminatorio dos situaciones perfectamente semejantes y que en virtud del principio de la igualdad de rango constitucional deben tener un tratamiento legal idéntico.

No entiende el despacho cual es el beneficio que puede traer para el manejo de los recursos del Sistema general de participaciones en agua y saneamiento básico, llegar a la conclusión que el Municipio no cumplió porque el acuerdo se expidió antes de la vigencia de la ley 1450 de 2011 cuando la norma no lo exige, basta que el acuerdo este vigente y cumpla los parámetros de la ley, como es el caso del acuerdo 006 de 2011.

Señor Superintendente, el municipio acredita que para la vigencia 2013 tenía vigente un acuerdo que regulaba lo concerniente a los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, esto es el Acuerdo No 006 de 2011 que para la vigencia 2013 se encuentra vigente por cuanto no ha perdido su fuerza ejecutoria, no ha sido derogado o suspendido hasta la fecha en virtud de la ley 1450 de 2011, vio ampliado su vigencia por cinco años adicionales.

El Acuerdo No 006 de 2011 se ajusta a los parámetros establecidos por la ley 1450 de 2011 en materia de subsidios y contribuciones, el Municipio de Sabana de Torres para el año 2013 aplicó subsidios y fijó aportes solidarios que cumplen los preceptos de la ley 1450 de 2011.

Así las cosas, resulta pertinente acceder a declarar que el municipio de Sabana de Torres cumplió con todas las obligaciones establecidas en el Artículo 6 del decreto 1448 de 2014 y por tanto debe ser certificado para administrar los recursos del Sistema general de Participaciones de Agua y Saneamiento Básico.

PETICIONES

"Respetuosamente me permito solicitar a su despacho se sirva aceptar las explicaciones presentadas por el Municipio de Sabana de Torres, aceptar que el Municipio de Sabana de Torres cumplió con todos los requisitos previstos en el Artículo 6 del Decreto 1448 de 2014 y por consiguiente se REVOQUE la Resolución impugnada y en su efecto se Certifique al Municipio de Sabana de Torres para Administrar los Recursos de Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento Básico SGP- APSB."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado con el No. SSPD 20155290103892 de 2015, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Certificación expedida por el gerente de la empresa municipal de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico de Sabana de Torres en la que certifica que se aplicaron los porcentajes de subsidios y aportes solidarios de según lo ordenado por el Acuerdo Municipal No. 06 de 2011.

3.3.2. Certificación proferida el 5 de marzo de 2015 por la notaria única de Sabana de Torres en la que consta que el señor JAIRO RIVERA ARCINIEGAS, actualmente esta ejerciendo el cargo de Alcalde Municipal.

3.3.3. Acta de posesión de Alcalde electo del señor JAIRO RIVERA ARCINIEGAS.

3.3.4. Escritura Publica mediante la cual toma posesión el alcalde municipal.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el aspecto relacionado con la aplicación de la metodología señalada por el Gobierno Nacional, para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones.

Teniendo en cuenta que el objeto del Decreto 1484 de 2014 es: *"reglamentar las normas del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico para los departamentos, distritos y municipios relacionadas con el giro de los recursos, la certificación para los distritos y municipios para la administración de los mismos y el aseguramiento de la prestación de los servicios..."*; y en cumplimiento a lo preceptuado por esta norma, en cuanto a la verificación de los requisitos estipulados en el artículo 6º, para el caso, la Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, se debe acreditar a través de los requisitos señalados en esta norma: *"(i) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.*

En caso de no poder acreditar el requisito de la forma descrita, podrá:

a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,

b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar."

Mediante la Resolución No. SSPD 20144010064895 de 26 de diciembre 2014, notificada personalmente al alcalde municipal, se desertificó al municipio de Sabana de Torres. De acuerdo a la información reportada en el Sistema Único de Información SUI se verificó que cargó el Acuerdo Municipal No. 006 del 16 de enero de 2011, para acreditar la vigencia 2013, es así, que la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios dentro de la Resolución de descertificación establece que el Acuerdo No. 06 de

2011: " fue expedido antes de la entrada en vigencia de la ley 1450 de 2011 el día 16 de junio de 2011, por ello, el acuerdo en mención no puede tener la vigencia de 5 años que se encuentra señalada en el artículo 125 de la ley 1450, en virtud del principio de irretroactividad de la ley. En consecuencia, este requisito queda como incumplido por parte del municipio".

El recurrente afirma que el Acuerdo Municipal No. 06 de 2011, se encuentra vigente y acorde a la normativa que regula la materia, por tanto la aplicación del mencionado Acuerdo debe acreditar la vigencia 2013. En ese orden de ideas, se aclara que no es factible encontrar el fundamento legal de un acto administrativo en una norma posterior, por lo cual el Acuerdo No. 06 de 2011, debía reglarse a lo señalado en el artículo 2 del Decreto 1013 de 2005, el cual señala la metodología para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y que dispone:

"Artículo 2°. Metodología para la determinación del equilibrio. La presente metodología deberá llevarse a cabo cada año para asegurar que para cada uno de los servicios, el monto total de las diferentes clases de contribuciones sea suficiente para cubrir el monto total de los subsidios que se otorguen en cada Municipio o Distrito por parte del respectivo concejo municipal o distrital, según sea el caso, y se mantenga el equilibrio. Esta metodología corresponde a la descrita en los siguientes numerales:

1. Antes del 15 de julio de cada año, todas las personas prestadoras de cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios y consumos, la estructura tarifaria vigente, y el porcentaje o factor de Aporte Solidario aplicado en el año respectivo, presentarán al Alcalde, por conducto de la dependencia que administra el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del respectivo municipio o distrito, según sea el caso, una estimación para el año siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar por concepto de aportes solidarios, así como la información del número total de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso, y para los servicios de acueducto y alcantarillado, la desagregación de consumos y vertimientos, respectivamente, según rango básico, complementario o suntuario.

En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los Grandes Generadores y la información de los Pequeños Productores y Multiusuarios que lo hayan solicitado.

2. Las personas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente decreto, de acuerdo con la estructura tarifaria vigente y con los porcentajes de subsidios otorgados para el año respectivo por el municipio o distrito, estimarán cada año los montos totales de la siguiente vigencia correspondientes a la suma de los subsidios necesarios a otorgar por estrato y para cada servicio.

3. Con la información obtenida según lo indicado en los numerales anteriores, las personas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente decreto, establecerán el valor de la diferencia entre el monto total de subsidios requerido para cada servicio y la suma de los aportes solidarios a facturar, cuyo resultado representará el monto total de los recursos necesarios para obtener el equilibrio.

4. Con base en dicho resultado, las personas prestadoras de los servicios presentarán la solicitud del monto requerido para cada servicio al alcalde municipal o distrital, según sea el caso, por conducto de la dependencia que administra el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.

5. Recibida por parte del alcalde municipal o distrital la solicitud o solicitudes de que trata el numeral anterior, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto consolidado sobre el particular para ser presentado a discusión y aprobación del concejo municipal o distrital, quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial, definirá el porcentaje de aporte solidario necesario para solventar dicho faltante, teniendo en consideración prioritariamente los recursos con los que cuenta y puede contar el municipio o distrito en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, con base en las fuentes de recursos para contribuciones señaladas en el artículo 3° del Decreto 849 de 2002 y demás normas concordantes.

Parágrafo 1°. Tanto los factores de subsidio por estrato como el porcentaje o factor de Aporte Solidario en cada servicio, definidos por el Concejo, serán iguales para todas las personas prestadoras del mismo servicio en el municipio o distrito respectivo.

Parágrafo 2°. Una vez aprobado y expedido el acuerdo correspondiente, el alcalde y el concejo municipal o distrital, deberán divulgarlo ampliamente en los medios de comunicación locales y regionales, señalando claramente el impacto de su decisión sobre las tarifas a usuario final de cada uno de los servicios."

En congruencia con la norma citada es claro que es responsabilidad de las autoridades municipales velar por la eficiente administración de los recursos y contribuciones con los cuales se subsidia los servicios públicos domiciliarios del municipio, en consecuencia, se configura una labor mancomunada entre la Alcaldía y el Concejo municipal el emitir anualmente un acto administrativo que permita identificar las condiciones reales para el pago y giro de subsidios por estrato en cada municipio. El concepto No. 635 de 2011 de la oficina asesora jurídica de esta Superintendencia establece el siguiente lineamiento: "el parágrafo 1 del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, determina en principio que los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia de 5 años (termino de vigencia para los factores de los subsidios). Sin embargo, el Decreto 1013 de 2005,

establece una metodología que se deberá realizar anualmente; en donde las dependencias que administran los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los respectivos Municipios o Distritos, cada año deberán presentar la estimación del año siguiente de los montos totales a recaudar por conceptos de aportes solidarios, con el fin de mantener el equilibrio entre subsidios y contribuciones, de tal manera que si se varían las condiciones para garantizar tal equilibrio respectivo, deberán ser modificados los factores señalados"

Finalmente, según la regulación legal y conceptual desarrollada por esta SSPD, si bien es cierto, que se establece un termino de validez para los acuerdos municipales de 5 años, estos adquieren eficacia una vez la norma que regula la materia se encuentre vigente, de lo contrario y para el caso en concreto al emitir un acuerdo anterior a la promulgación de la ley éste no adquiere efectos en el tiempo, por lo cual existe la obligación para la administración municipal de actualizar y expedir un acto administrativo posterior a la entrada en vigencia la Ley 1450 de 2011 o remitir anualmente un acuerdo donde conste el porcentaje de subsidios a pagar en cada vigencia a certificar.

El recurrente afirma que el Acuerdo No. 06 de 2011 se ajusta a la ley 1450 de 2011, pues el acto administrativo reportado ante esta entidad se encuentra expedido conforme al artículo 125 de la misma, ahora para desarrollar la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la cual entró a regir el 16 de junio de 2011, una vez fue publicada en el Diario Oficial No. 48.102, nos remitimos al concepto 073 de 2013 emitido por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que señala:

"ARTÍCULO 125. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3. Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 20 de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios suministrados por productores de servicios marginales independientes o para uso particular, y ellos mismos en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los aportes de contribución al respectivo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en los porcentajes definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico regulará la materia.

PARÁGRAFO 1o. Los factores de subsidios y contribuciones **aprobados** por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores **podrán ser modificados antes del término citado**, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de los cobros de los servicios públicos domiciliarios, se considerará a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como suscriptores industriales.

(...)" (Subrayas fuera de texto).

En los términos anteriores, por virtud de la Ley del Plan de Desarrollo, desde el 16 de junio de 2011, los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los concejos municipales al momento de su expedición, estarán vigentes por cinco años, siempre que no cambien las condiciones de los mismos en cuanto a la garantía del equilibrio entre subsidios y contribuciones, caso en el cual podrán ser modificados.

Es importante tener en cuenta la naturaleza de la norma objeto de estudio dentro del contexto de la Ley del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que si bien se trata de una ley ordinaria, la Constitución Política señala que la ley por la cual se aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas, como es el caso de la Ley 1450 de 2011, tendrá prelación sobre las demás leyes. En consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores.

En este orden de ideas, por virtud de la Ley del Plan de Desarrollo, el Legislador en virtud de su facultad de configuración, otorgó vigencia de cinco años a aquellos porcentajes de subsidios y contribuciones que hubiesen sido aprobados por los concejos municipales, siempre que conserven los parámetros previstos en la misma disposición en cuanto a mínimos y máximos de los porcentajes de subsidios y

contribuciones y no varlen las condiciones que les dieron origen en cuanto al mantenimiento del equilibrio entre subsidios y contribuciones.

Ahora bien, no se observa de la disposición en comento que hubiese sido voluntad del Legislador que se hicieren las ampliaciones o aclaraciones sobre la vigencia de tales acuerdos por virtud de la norma. Por el contrario, se señala un imperativo, en el sentido de otorgar validez a tales acuerdos, puesto que los mismos siendo aprobados por el concejo municipal, "tendrán" vigencia de cinco años ya que, se repite, propenden por el mantenimiento del equilibrio entre subsidios y contribuciones."

En ese entendido es claro que el municipio no logra acreditar con el acuerdo 06 de 2011 la vigencia 2013, pues como se desarrollo anteriormente la ley 1450 de 2011 empezó a regir desde el 16 de junio de 2011 por tanto las disposiciones ahí consignadas rigen desde el momento de su expedición y publicación, sin embargo en atención al decreto 1013 de 2005 era deber de la administración municipal formular una metodología anual donde se desarrollen los porcentajes de estratificación para el giro de subsidios del sistema general de participación, omisión que trae como consecuencia la descertificación del municipio"

En resumen, el Acuerdo 06 de 2011 mas allá de ser un acto administrativo que cuenta con vigencia al no haber sufrido modificaciones, cambios, adiciones o estar derogado no se ajusta de forma taxativa a la regulación normativa vigente al momento de la emisión de la Ley 1450 de 2011, pues dada la irretroactividad de la norma tal como lo señala la ley 153 de 1887 en su artículo 2 la ley posterior prevalece sobre la ley anterior, por lo tanto el municipio de Sabana de Torres de forma pro activa debe a través del Alcalde municipal anualmente definir los criterios a partir de los cuales se asignarán los recursos destinados al pago de los subsidios de acuerdo a los porcentajes aprobados por el Concejo Municipal esto dentro de los deberes legales y constitucionales.

Podemos concluir entonces que los acuerdos municipales expedidos por los Concejos Municipales a partir de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, cuentan con una vigencia de 5 años, salvo se corrobore la existencia de un acto administrativo que lo modifique, derogue o sustituya.

Con respecto a la legalidad y la ejecutoriedad del acto administrativo de la cual se hace mención en el recurso de reposición materia de estudio, esta Superintendencia informa que esta entidad no es idónea para pronunciarse sobre la legalidad, y ejecutoriedad de los acuerdos municipales; la competencia de esta entidad se contrae a ejercer la vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos con el fin de velar por la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo tal como se define en los artículos 365 a 370 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994.

A pesar que la Entidad está facultada para ejercer la inspección, control y vigilancia de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, no está facultada para revisar los actos que expidan los concejos municipales. La revisión de los actos expedidos por los alcaldes y concejos municipales le corresponde realizarla a los Gobernadores según el artículo 305 numeral 10 de la Constitución Política. Cuando se observen motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad del acto deben ser remitidos al Tribunal competente para que decida su validez.

Con respecto a la irretroactividad de las normas la jurisprudencia de manera reiterada en sentencia del 3 de junio de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado al igual que en la sentencia del 30 de octubre de 2003, Exp. 21570, M.P. María Elena Giraldo Gómez, ha determinado que:

"La ley 153 de 1887 determina que las leyes procesales (de sustanciación y ritualidad de los juicios) rigen desde su vigencia y por tanto prevalecen sobre las anteriores, es decir que son de aplicación inmediata excepto cuando se trate de términos que hubieren empezado a correr, actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, pues se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación (art. 40). Tal previsión ha permitido concluir que a las situaciones reguladas en leyes no procedimentales (sustanciales) debe aplicárseles la ley vigente al momento del acaecimiento del hecho que la ley sanciona, coligiéndose entonces que la regla general predominante es la de irretroactividad de la ley y que la excepción nace de la indicación expresa del legislador sobre retroactividad o cuando en materia penal y disciplinaria aparece el principio de favorabilidad. Dicho principio general de irretroactividad de las leyes no procedimentales, como regla general, permite hacer efectivos otros principios como son los de la seguridad jurídica y del juzgamiento con base en la legalidad preexistente al hecho que se imputa (art. 29 Constitución Política)".

Para el caso en concreto, la irretroactividad de la Ley 1450 de 2011, se hace evidente pues en su artículo 276 señala: "vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias", es así, y como lo a desarrollado la jurisprudencia Nacional las normas son retroactivas cuando la misma lo señale expresamente: "Tiénese, pues, a manera de colofón, que incumbe al legislador fijar en cada ley el ámbito temporal dentro del cual ésta va producir sus efectos, potestad amplia y autónoma que le permite acomodar el ordenamiento jurídico a las condiciones que las nuevas manifestaciones sociales imponen y que solo encuentra valladar irreductible

en el artículo 58 de la Constitución Nacional, que le impide proferir preceptos que alteren los efectos ya cumplidos con anterioridad a su vigencia, y que solamente a falta de un señalamiento expreso al respecto, emanado del legislador, compete al intérprete la tarea de determinar los alcances en el tiempo de esa normatividad, labor que debe ajustarse, de todas formas, a las disposiciones previstas en la predicha ley 153 de 1887, teniendo siempre presente que ésta señala como criterios hermenéuticos generales los de la irretroactividad y la eficacia inmediata de la ley", expediente No 6726 de marzo de 2003, Corte Suprema de Justicia.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no logra acreditar el cumplimiento del requisito que se le demanda, y por lo tanto el recurso formulado por el alcalde municipal de SABANA DE TORRES, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD SSPD 20144010064895, del 26 de diciembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de SABANA DE TORRES, del departamento SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

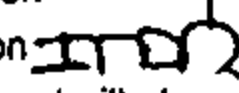
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Bogotá, D. C.


JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Silvia Constanza Zambrano Díaz- Contratista Grupo de Certificaciones e Información 

Revisó: Juan Leonardo Álvarez Arévalo- Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Irina Margarita Amín David - Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información 

Visto Bueno: Edgardo Torres- Contratista Superintendencia Delegada para acueducto, Alcantarillado y aseo 

Expediente: 20094017074280997A